

Santiago, treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Miguel Vázquez Plaza, con fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, dicta sentencia definitiva en la cual, en relación al delito de secuestro calificado en la persona de doña Reinalda del Carmen Pereira Plaza, cometido en Santiago a partir del día 15 de diciembre de 1976, adoptando las siguientes decisiones en el ámbito penal:

I.- Absolver a Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, Juan Edmundo Suazo Saldaña, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Hiro Álvarez Vega, Celinda Angélica Aspe Rojas, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Eduardo Patricio Cabezas Mardones, Italia Donatta Vacarella Gilio, Camilo Torres Negrier, Marilyn Melahani Silva Vergara y José Domingo Seco Alarcón, de los cargos de ser coautores del delito de secuestro calificado en la persona de Reinalda del Carmen Pereira Plaza;

II.- Condenar a Hernán Luis Sovino Maturana, José Alfonso Ojeda Obando, José Miguel Meza Serrano, Luis Alberto Lagos Yáñez, Jorge Iván Díaz Radulovich, Jorge Segundo Pichunmán Curiqueo, Sergio Hernán Castro Andrade, Carlos Enrique Miranda Mesa, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Berta Yolanda del Carmen Jiménez Escobar, Carlos Eusebio López Inostroza y Joyce Ana Ahumada Despouy, a la pena de cuatro años presidio menor en su grado máximo, accesorias legales y, al pago de las costas de la causa, como cómplices del referido delito;

III.- Condenar a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Juan Hernán Morales Salgado y Ricardo Víctor Lawrence Mires, a la pena de diez años de presidio



mayor en su grado mínimo, accesorias legales y, al pago de las costas de la causa, como coautores del delito de secuestro calificado ya indicado;

IV.- Condenar a Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Sergio Orlando Escalona Acuña, Jorge Lientur Manríquez Manterola, María Angélica Guerrero Soto, Orfa Yolanda Saavedra Vásquez, Elisa del Carmen Magna Astudillo, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme, Heriberto del Carmen Acevedo, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Emilio Hernán Troncoso Vivallos, Teresa del Carmen Navarro Navarro, José Manuel Sarmiento Sotelo, Gustavo Enrique Guerrero Aguilera, Manuel Antonio Montre Méndez y Jorge Hugo Arriagada Mora, a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y, al pago de las costas de la causa, como coautores del mismo delito.

Conforme a la extensión de las penas impuestas y por no reunirse los requisitos legales, se decretó el cumplimiento efectivo de las penas corporales, reconociendo los abonos que en cada caso indica.

Impugnada dicha sentencia definitiva, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a rechazar los recursos de casación en la forma, lo mismo que los recursos de apelación formulados.

Finalmente, en contra de esta última sentencia, se dedujeron los recursos de casación que pasan a examinarse, todos respecto de los que se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:



I. RESPECTO DEL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.

1º) Que previo al análisis de los recursos impetrados, cabe mencionar que, en el considerando ocho del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

“a) Que, la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, en una fecha no precisada, pero durante el primer semestre del año 1976, ocupó y habilitó un inmueble de calle Simón Bolívar N° 8800, comuna de La Reina, consistente en una casa quinta, que fue acondicionada para su propósito de reclusión. Contaba con un solo portón de acceso, una garita a su derecha donde se hacía la guardia de puerta, una casa al fondo, una cancha de baby futbol, estacionamientos y al lado izquierdo del predio una especie de gimnasio donde había un casino, cocina y unos camarines y baños, que se acondicionaron para ser utilizados como calabozos, inmueble en el que se desempeñó operativamente la brigada Lautaro a cargo del mayor Juan Morales Salgado y que fue ocupado como un lugar secreto y clandestino de reclusión; a dicho recinto eran llevadas personas en calidad de detenidas, para ser interrogadas bajo el empleo de diversas técnicas de apremios físicos, en especial respecto de aquellas que tenían o habían tenido militancia política adherente al Partido Comunista.

b) Que asimismo, en el segundo semestre del año 1976, se trasladaron a dicho recinto, las agrupaciones de la DINA a cargo de los oficiales Germán Barriga y Ricardo Lawrence, conjuntamente con sus agentes operativos, los que se preocuparon fundamentalmente de investigar, ubicar, allanar, perseguir, reprimir y desarticular a los miembros del Partido Comunista, en especial a sus cúpulas directivas, para lo cual se habilitaron dependencias provisorias para su



instalación; consistentes en oficinas, un gimnasio y camarines que fueron calabozos de encierro, en donde se realizaban los interrogatorios y torturas, utilizando apremios con diversos métodos.

c) Que, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, embarazada de su primer hijo, de 5 meses de gravidez, tecnólogo médico y militante comunista, que trabajaba asilando personas y como enlace entre Eliana Ahumada y Fernando Navarro, aunque también relacionada al militante comunista Fernando Ortiz, fue detenida a sus 29 años de edad, aproximadamente a las 20:30 horas, mientras esperaba locomoción colectiva, por agentes de seguridad el día 15 de diciembre de 1976, en la calle Exequiel Fernández esquina Rodrigo de Araya, comuna de Ñuñoa, actualmente comuna de Macul. Los agentes que la detuvieron, se movilizaban en dos automóviles marca Peugeot; uno de ellos patente HLN-55, de donde se bajó un sujeto que la tomó violentamente, al dar gritos de auxilio, se bajó un segundo sujeto con el cual fue reducida a la fuerza e ingresada al interior del vehículo. La detención fue materializada en presencia de testigos que se encontraban en los diversos locales comerciales circundantes, que dan cuenta que una vez reducida la víctima y materializada la detención, el automóvil se dirigió por Rodrigo de Araya en dirección al norte.

d) Que, Reinalda del Carmen Pereira Plaza fue trasladada al cuartel secreto de reclusión Simón Bolívar, donde fue vista junto a otros privados de libertad, que a su vez, habían sido detenidos por las mismas brigadas bajo la misma política operativa entre el 13 y 15 de diciembre de 1976; esto es, Héctor Veliz Ramírez, Fernando Navarro Allendes, Lincoyán Yalu Berrios Cataldo, Juan Fernando Ortiz Letelier y Horacio Cepeda Marincovich. En este lugar, Reinalda



fue duramente golpeada, torturada, apremiada ilegítimamente y luego hecha desaparecer, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero.

e) Que, el gobierno chileno de la época, dada las gestiones de búsqueda efectuadas por sus familiares, informó que la afectada registraba salida “a pie” por el paso fronterizo de Chile con Argentina Los Libertadores, el día 21 de diciembre de 1976, versión oficial que se estableció judicialmente como falsa, según consta en proceso tenido a la vista, autos Rol 2-77, en el cual se constató que la hoja de ruta que consignaba dichas circunstancias, había sido falsificada.

f) Que, la víctima de autos fue detenida en la vía pública al igual que otras trece personas en circunstancias similares; once pertenecientes al Partido Comunista y dos al MIR y, donde la información proporcionada por el Gobierno Militar fue semejante y errada, demostrando un operativo a gran escala que obedeció a una política de investigación, persecución y desarticulación del Partido Comunista y no, a un hecho aislado.

g) Que, todas las personas antes mencionadas, incluida la víctima, fueron detenidas para ser interrogadas y torturadas en razón de su militancia política y, a fin de obtener información sobre sus actividades de partido y la identificación de otros miembros del Partido Comunista en la clandestinidad; apremios que no cesaban hasta la obtención de la información requerida o, hasta la inconciencia de las víctimas.”;

2º) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro calificado de la víctima ya indicada, considerando que el mismo, además, conforma un crimen de lesa humanidad en consideración a los fundamentos expuestos en la motivación nueve de la decisión



de primera instancia, aspecto que se mantuvo en la revisión ejecutada por el Tribunal de Alzada;

3°) Que por parte del apoderado de los sentenciados Jorge Arriagada Mora y Luis Lagos Yáñez, se deduce un recurso de casación en la forma, el cual se hace consistir en la causal del numeral 2° del artículo 541 del Código del Código de Procedimiento Penal, en donde se establece como un vicio de esta clase: *“No haber sido recibida la causa a prueba, o no haberse permitido a alguna de las partes rendir la suya o evacuar diligencias probatorias que tengan importancia para la resolución del negocio. Para alegar esta causal contra una sentencia de segunda instancia será menester que se haya pedido expresamente, en dicha instancia, que se reciba la causa a prueba y que este trámite sea procedente”*.

Al respecto, refiere que, en segunda instancia, pidió la apertura de un término probatorio para acreditar que sus defendidos no estaban en el cuartel Simón Bolívar a la época de los hechos, contando con elementos probatorios para desvirtuar esa afirmación que solo emana de dos testimonios que declararon en el sumario, los cuales califica de mendaces, pero, aun así, no se le permitió desvirtuar sus asertos.

En tal sentido, insta por la casación de la sentencia y, en su lugar, se determine el estado en que ha de quedar la causa, en particular, se ordene recibir la causa a prueba, disponiendo se remita la misma a juez no inhabilitado, a fin de que determine lo que en derecho corresponda y se condene en costas a los jueces recurridos, aplicando una medida disciplinaria a cada uno de ellos;

4°) Que, al examen del recurso presentado, consta el escrito de la recurrente, en el que solicita la apertura de un término de prueba, lo cual



fundamenta en su necesidad de controvertir los elementos incriminatorios de participación, lo que se lograría con los documentos ofrecidos y los dichos de los testigos indicados. Enseguida, aparece la decisión del tribunal de alzada que se cuestiona, la cual rechaza la petición basada en que, en la especie, no se cumplen ninguno de los presupuestos que establece el artículo 517 del Código de Procedimiento Penal;

5°) Que, a propósito de la prueba en segunda instancia, la regla procesal que regula este asunto es, precisamente, el citado artículo 517 del Código Adjetivo al que hace referencia la resolución cuestionada. En este caso, se dan dos supuestos, siendo el invocado por la recurrente el que está contenido en el primero de los numerando, el que señala: *Cuando se alegare algún hecho nuevo que pueda tener importancia para la resolución del recurso, ignorado hasta el vencimiento del término de prueba en primera instancia.*

En este orden de consideraciones, dicho lo anterior y del examen de la presentación, es claro que la recurrente no precisa ningún *hecho nuevo* como lo exige la mentada disposición sino que solo buscaba confrontar el sustento probatorio que inculpa a los sentenciados y que, por de pronto, tampoco se justificó ni explicó si ello era ignorado por la parte *hasta el vencimiento del término de prueba en primera instancia*, tal como se requiere, de allí que no advierte yerro alguno al desestimar la petición. Además, el *nuevo hecho* - el que no fue señalado - debe tener relevancia para la resolución del recurso de apelación, lo cual es una determinación privativa de los sentenciadores. Lo mismo se ha dicho por esta Corte, cuando refiere que, “... es del arbitrio del Tribunal, según lo dispone el artículo 518 del Código de Procedimiento Penal, apreciar los motivos que califican



la importancia que el hecho nuevo alegado puede tener en la resolución del asunto, el rechazo de la petición no puede servir de fundamento a la causal de casación de que se trata. Entonces, esta es, a todas luces, inaceptable.” (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. forma, 25 de abril de 1966. Sec. IV, parte II, pág. 94. Rev. año 1966).

En concreto, no se advierte ninguna deficiencia de parte del tribunal de alzada, con lo que ha de rechazarse el recurso planteado;

II. RESPECTO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN EN EL FONDO.

6°) Que, previo al análisis de los recursos penales, útil resulta recordar que el recurso de casación de forma y de fondo, conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena al reclamante a expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación.

Dicho lo anterior, parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de



determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964);

7°) Que, siguiendo este orden de consideraciones, existe un consenso asociado a la incompatibilidad y contradicción vinculada a las causales de casación de los numerales 1° y 7° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal pues, los argumentos que pueden conformar uno u otro resultan incompatibles entre sí, por ello antinómicos, es decir, son contrarios a la lógica y la epistemología ya que, por un lado, quien propone la primera de las causales de casación en el fondo que menciona el artículo 546 del Código Adjetivo, *per se*, debe aceptar los hechos que la sentencia tiene por acreditados y lo que cuestiona, en realidad, es la imposición de la pena en relación al delito, cometiendo un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, al proponer un motivo de nulidad como el que describe el numeral séptimo de la mentada disposición, precisamente controvierte la observancia de las leyes reguladoras de la prueba en la construcción de dichos hechos, de tal manera que, como puede advertirse, los motivos no son armónicos sino, más bien, contrapuestos o antagónicos.

En este caso, no está de más recordar que, desde el fallo de la SCS 05.1920, G.J. 1920, 1er sem., nro. 60, p. 323, en adelante, la jurisprudencia ha venido sosteniendo que esta causal –la del nro. 1- supone necesariamente la existencia del delito y la responsabilidad del procesado, puesto que ella resulta de



una imposición al reo de una pena distinta de la que le corresponde (*Repertorio del Código de Procedimiento Penal, cit., T. III, pp. 342 y s.s.*), de tal manera que el recurso, tanto por su planteamiento y por su petitorio, le impiden a esta Corte un pronunciamiento de fondo y lleva a su necesario rechazo, ello en atención a las incongruencias insalvables que se presentan en la interposición de un recurso extraordinario y de derecho estricto como lo es el de casación en el fondo, en donde predominan reglas procesales absolutas que no pueden ser soslayadas, ya que lo contrario llevaría a desnaturalizar su fisonomía jurídica y la finalidad perseguida por la ley al incorporarlo a su normativa.

En mismo sentido, se ha dictaminado que, *“hay contradicción entre las causales 1ª y 7ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal porque la primera se refiere a que se haya calificado como delito un hecho lícito y la segunda, en la forma propuesta por el recurrente, mira a la responsabilidad del reo, por donde se deduce que no se ha hecho mención determinada de las leyes que se suponen infringidas puesto que la infracción de las normas que configuran el delito excluye la de las que establecen la responsabilidad; sólo es posible representar éstas cuando se admite que aquellas fueron correctamente aplicadas.”* (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 4 de octubre de 1966. Sec. IV, parte II, pág. 269. Rev. año 1966);

8º) Que, lo anterior, necesariamente viene asociado al reconocimiento que se mantiene a la soberanía o intangibilidad de los jueces de fondo en su facultad sobre la determinación de los hechos. Tal postulado le impide a la Corte Suprema rever los hechos y la obliga a aceptarlos. En ese entendido, en su momento se sostuvo que *“a los jueces de la instancia les corresponde el establecimiento de los*



hechos y para este efecto disponen de la facultad privativa y soberana de valorar el mérito intrínseco de los diversos medios legales de prueba acumulados en la causa, sin que el ejercicio de esta facultad de ponderar y comparar discrecional y subjetivamente esos mismos elementos del proceso, esté sujeto a la censura del tribunal de casación, ni pueda caer dentro del ámbito en que opera la causal del N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, puesto que las leyes reguladoras de la prueba, cuya infracción da base al recurso de casación en el fondo, son sólo aquellas que establecen prohibiciones o limitaciones a la facultad antedicha, como lo sería la admisión en los fundamentos del fallo de antecedentes ajenos a los medios de prueba reconocidos como tales por el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal” (Rev. D. y J. T. LI, Segunda Parte, Sección Cuarta, Pág. 56, citado en la obra Tratado de Derecho Procesal Penal. T. II, Pág. 393 y 394, del autor Rafael Fontecilla Riquelme). En un mismo sentido se resolvió que, “la apreciación de las leyes reguladoras de la prueba a que alude el N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, implica la violación de una norma legal relativa a la prueba, pero no a la apreciación de los hechos, que la ley siempre radica, soberanamente, en los jueces de las instancias” (Rev. D. y J. T. LI, Segunda Parte, Sección Cuarta, Pág. 89, citado por el referido autor).

Como se puede apreciar, existe ya una interpretación asentada respecto a la invariabilidad de los hechos apuntados por los sentenciadores del grado, los que cuentan con la facultad de apreciar la prueba para determinar los mismos y, ese ámbito escapa de la acción revisora de la Corte Suprema, salvo que los jueces violenten de forma grave las normas reguladoras de la prueba y ello tenga influencia en lo dispositivo del fallo – no siendo este el caso de autos –, lo que



debe ser descrito con claridad, siendo del todo insuficiente una enumeración de las normas legales que se denuncien violentadas o la descripción parcializada de ciertos elementos probatorios que, por lo demás, fueron debidamente justipreciados a propósito del análisis efectuado por los sentenciadores de fondo en el ejercicio de sus atribuciones propias, materia que, como se ha dicho, escapa del control de esta Corte, idea que predomina desde el Proyecto del Código de Procedimiento Penal para la República de Chile y que se devela en las palabras de don Manuel Egidio Ballesteros, quien expresare: *“nosotros fijamos reglas generales para la manera de estimar la prueba, y consignamos los casos en que debe estimarse bastante para acreditar la existencia de un hecho, pero al mismo tiempo dejamos al juez la libertad de criterio para hacer sus inducciones o deducciones”*;

9º) Que, en este orden de cosas, la defensa de los sentenciados Jorge Arriagada Mora y Luis Lagos Yáñez dedujo un recurso de casación en el fondo, en el cual se enuncian las causales de los N°s 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, lo cual relaciona con los artículos 11 N° 6, 15 N° 1, 68 inciso 3º, 68 bis, 69, 141 inciso 1º y 3º, 103 del Código Penal; los artículos 108 a 241, 451, 456 bis y en adelante, especialmente el N° 1º del artículo 460, 461, 477, 478, 479, 485, 486, 487, 488, 489, 490 y 502 del Código de Procedimiento Penal, y; artículos 6, 211, 214 inciso 2º, 423, 424 y 425 todos del Código de Justicia Militar.

En este caso, sin distinguir a qué causal lo asocia, denuncia errores en torno a la participación criminal y en la calificación jurídica realizada, apuntando que las tareas ejecutadas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y sus funcionarios, no conforman un dolo común en cada una de sus acciones sino que



cada uno debe responder por su propio dolo y, en el caso de los inculpados Arriagada y Lagos, sus actuaciones consistieron en la búsqueda de información, de allí que carecían de las competencias y conocimientos mínimos para interrogar y, por las características de tales, sus funciones no pueden tener el carácter de un delito de lesa humanidad.

Enseguida, advierte como un yerro el hecho que los sentenciadores de segundo grado, pese a reconocerle la rebaja de responsabilidad criminal del artículo 11 N° 6 del Código Penal, ello no haya tenido ninguna clase de incidencia en el quantum de la pena impuesta. Además, cuestiona que no se le haya reconocido la media prescripción ni las atenuantes de los artículos 211 e inciso 2° del artículo 214 del Código de Justicia Militar.

En concreto, solicita que se case el fallo de segundo grado y, sin nueva vista, se dicte la sentencia de reemplazo, absolviendo o acogiendo todas y cada una de las atenuantes alegadas y la concedida, actuando de la forma como lo ordena el artículo 68 inciso 3° del Código Penal, rebajando en tres grados la pena, contando desde el mínimo, si decidiere condenar. En todo caso, solicita modificar el carácter de lesa humanidad respecto de sus acciones, aplicando respecto de sus defendidos la prescripción de la acción penal, absolviéndolos;

10°) Que, por parte de la defensa de la sentenciada Elisa Magna Astudillo, también se deduce un recurso de casación en el fondo, el que se basa en las causales de invalidación de los numerales 1° y 7° del artículo 546 del Código de Procedimiento Criminal, en donde se denuncian como infringidos los artículos 1, 15 N° 1 y 141 N°1 del Código Penal.



En términos generales, luego de revisar aspectos de las conclusiones adoptadas en primera y segunda instancia, señala que su defendida no realizó labores propias del delito de secuestro y, por tanto, ella no estaba en dominio del hecho. A lo anterior, aclara que ella, en su indagatoria, no reconoce a la víctima del secuestro de autos y niega toda participación en el ilícito, lo cual descarta cualquiera clase de confesión judicial.

En este caso, pide que se declare nula la sentencia recurrida y, en su lugar, dicte sentencia de reemplazo que en derecho corresponda, absolviendo a la acusada de los hechos investigados en autos;

11°) Que, de igual forma, el apoderado de la sentenciada Gladys Calderón Carreño, se dedujo un recurso de invalidación de fondo, el que se basa en los mismos motivos de casación de los N° 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, apuntando que la sentencia recurrida ha infringido los artículos 488 N° 1 y 2, 456 bis, 459, 481 y 109, todos del Código de Procedimiento Penal, al igual que los artículos 1, 15 N° 1 y 141 N° 1 del Código Penal.

En concreto, detalla las conjeturas adoptadas en la instancia, recordando que la inculpada solo ejecutó una orden emanada de Ricardo Lawrence Mires, lo cual, en ningún momento alcanzó a la víctima de esta causa y, por tanto, no realizó labores propias del delito de secuestro. Lo anterior, en su concepto, evidencia que, en su indagatoria, niega haber suministrado inyección de algún elemento químico a la víctima y ello denota que negó toda participación.

En conclusión, solicita que se declare nula la sentencia recurrida y, en su lugar, se dicte la sentencia de reemplazo que en derecho corresponda, absolviendo a la acusada de los hechos investigados en autos;



12°) Que, en tanto, el apoderado que representa a los condenados José Sarmiento Sotelo, Emilio Troncoso Vivallos, Claudio Pacheco Fernández y Gustavo Guerrero Aguilera, también dedujo sendos recursos de casación en el fondo, los que basan en los capítulos de invalidación contenidos en los mismos numerales ya indicados.

En este caso, se cuestiona el dolo que se les atribuye a los inculpados y la valoración de las probanzas utilizadas para acreditar la participación de sus defendidos, criticando que ninguna de ellas hace plena prueba sobre la inculpación efectuada, de tal manera que acusa la infracción de los artículos 15 N° 1 del Código Penal y 488 N° 1 del Código de Procedimiento Penal.

En este sentido, se solicita la invalidación del fallo y se dicte una nueva sentencia conforme a la ley y al mérito del proceso, en la cual se declare que, en estos autos, no hay elementos que permitan sostener que los acusados participaron en alguna de las formas que establece el artículo 15 N° 1 del Código de castigo;

13°) Que, en el caso de los sentenciados Jorge Pichunman Curiqueo y Sergio Castro Andrade, su apoderado presenta un recurso de casación en el fondo que se basa en las causales de los numerales 1° y 7° del citado artículo 546 del Código Adjetivo. Dicha protesta lo vincula con el numerando 1° del artículo 488 del mismo cuerpo legal, en donde, principalmente, cuestiona el dolo que se le atribuye a sus defendidos y la valoración de las probanzas usadas para acreditar la participación de ambos, señalando que ninguno de ellos hace plena prueba sobre la inculpación efectuada.



Solicita que se invalide el fallo y se dicte una nueva sentencia conforme a la ley y al mérito del proceso, en la cual se declare que no existen elementos que permitan sostener una participación que se vincule a un reproche penal en los términos del artículo 16 del Código Penal;

14°) Que, un similar arbitrio plantea la asistencia letrada de los sentenciados Carlos Miranda Mesa y Orfa Saavedra Vásquez. En este caso, el apoderado de ambos plantea los motivos de invalidación de los numerales 1° y 7° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, acusando la infracción de los artículos 15 N° 1 del Código Penal y 488 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, en donde, principalmente, cuestiona el dolo que se le atribuye a sus defendidos y la valoración de las probanzas relativas a acreditar la participación de aquellos, señalando que no existen pruebas sobre la inculpación efectuada.

En consecuencia, solicita que se invalide el fallo, dictándose una nueva sentencia conforme a la ley y al mérito del proceso, en que se declare que los inculpados Saavedra y Miranda hicieron algo que se castigue en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal;

15°) Que, la última de estas defensas, la apoderada de María Angélica Guerrero Soto, presenta un recurso de casación en el fondo basado en las referidas causales 1° y 7° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, invocando una infracción de las leyes reguladoras de la prueba respecto a la calificación de las circunstancias atenuantes, en particular las contenidas en los artículos 211, en relación con el artículo 214 ambos del Código de Justicia Militar, y los artículos 11 N° 8, 11 N° 9 y 103 del Código Penal.



En consecuencia, solicita que se invalide el fallo de instancia y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que se resuelva, precisamente, que se revoca la sentencia recurrida, condenando a la inculpada como coautora del delito de secuestro calificado a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, y se aplique alguno de los beneficios de la Ley N°18.216;

16°) Que, finalmente, los apoderados de la Unidad Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y, de la parte querellante, en sus respectivos capítulos de invalidación, también plantean las causales de casación en el fondo de los numerales 1° y 7° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el N° 3 del artículo 15, 16 y 488 N°s 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal.

En ambos casos, denuncia una errónea aplicación del derecho por parte del sentenciador de segundo grado, al confirmar el fallo de primera instancia en cuanto impuso una pena menos gravosa de la que, con arreglo a la ley, le correspondía determinar, lo que se concretó con infracción a las leyes reguladoras de la prueba respecto de la participación de los sentenciados José Alfonso Ojeda Obando, José Miguel Meza Serrano, Luis Alberto Lagos Yáñez, Jorge Iván Díaz Radulovich, Jorge Segundo Pichunmán Curiqueo, Sergio Hernán Castro Andrade, Carlos Enrique Miranda Mesa, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Orlando del Transito Altamirano Sanhueza, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Berta Yolanda del Carmen Jiménez Escobar, Carlos Eusebio López Inostroza y Joyce Ana Ahumada Despouy, en calidad de cómplices del delito investigado.

En tal sentido, luego de expresar algunos aspectos sobre la coautoría, repasan los elementos de cargos usados para determinar la participación de los



mencionados, en donde existiría la voluntad común de los acusados en la ejecución del plan criminal dirigido contra militantes y dirigentes comunistas, lo que denota la existencia de un concierto previo entre todos ellos para la comisión del delito materia de la presente investigación.

Así las cosas, ambos solicitan acoger el recurso presentado y declarar que la sentencia recurrida es nula y, acto seguido y sin nueva vista, se dicte sentencia de reemplazo por la cual, junto con confirmar la condena en calidad de coautores del delito de secuestro calificado de Reinalda Pereira Plaza de los otros sentenciados y, además, se condena a todos los cómplices en calidad de autores por el mismo delito, a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales y costas de la causa;

17°) Que, como se puede advertir, en todos los casos precitados los recursos incurrir en un vicio insalvable en torno a su planteamiento, lo cual constituye un error asociado a su formalización y que fuerza a su inmediato rechazo, ello por los motivos indicados en los razonamientos sexto a octavo del presente fallo.

A mayor abundamiento, en el caso de los sentenciados Jorge Arriagada Mora, Luis Lagos Yáñez, Elisa Magna Astudillo, Gladys Calderón Carreño, José Sarmiento Sotelo, Emilio Troncoso Vivallos, Claudio Pacheco Fernández, Gustavo Guerrero Aguilera, Jorge Pichunman Curiqueo, Sergio Castro Andrade, Carlos Miranda Mesa, Orfa Saavedra Vásquez y María Angélica Guerrero Soto, los recursos incurrir en otros defectos que obstan a su acogimiento ya que, en su desarrollo, se precisan una serie de disposiciones que no son leyes reguladoras de la prueba, las cuales reglan o limitan el ejercicio judicial a la hora de tener por



acreditado o no los hechos del proceso. En este caso, para que las mismas puedan considerarse como violentadas, aparte de mencionarlas correctamente, es necesario que exista un desarrollo concreto y preciso acerca de dichos tópicos, lo cual no se advierte en el libelo que se examina, pues existe una argumentación basada en una constatación formal – no de fondo – por parte de las defensas y que la sentencia que se censura, de forma apropiada, se hace cargo de aquellas circunstancias que da por acreditadas, lo cual se inspira en una clara evidencia probatoria, de tal manera que, en realidad, lo que pretende el apoderado es proponerle a este tribunal de casación una nueva estimación de los hechos, una revaloración de los insumos probatorios, buscando, en definitiva, una conclusión diversa de aquella asentada en la instancia, lo que, como se viene sosteniendo, está vedado en las condiciones planteadas. En tal sentido, como explica el autor *Waldo Ortúzar L.*, en su obra *“Las causales de Recurso de Casación en el Fondo en Materia Penal”* (Editorial Jurídica, 10ª Edición, 27 de octubre de 1967, pág. 392 – 393), *“... no se entra a establecer la existencia de los hechos mediante nuevas pruebas, sólo se examina si la prueba rendida autoriza legalmente las declaraciones de hecho de la sentencia”*; debiendo, así descartarse los medios de impugnación deducidos;

18º) Que, igualmente, el mismo defecto en su instauración lo padecen los recursos de los acusadores particulares y que se describen en el considerando décimo sexto. En ambos casos, los arbitrios se apoyan en causales que resultan antinómicas entre sí, proponiendo, según el caso, una revaloración de los insumos probatorios que fueron ya aquilatados por los sentenciadores de las instancias. En sí, tal como ha resuelto la jurisprudencia de este Tribunal, *“el recurso de casación*



en el fondo ha sido instituido para enmendar los errores cometidos en la aplicación de la ley a los hechos del juicio y no puede extenderse a otras materias, por ser de derecho estricto; de donde se sigue que el establecimiento de los hechos en que debe fundarse el fallo no es revisable por el Tribunal de Casación, salvo que, como por excepción lo prescribe el artículo 546 N° 7, del Código de Procedimiento Penal, se hayan violado las leyes reguladoras de la prueba, esto es las que contienen las reglas según las cuales los hechos deben ser acreditados con los medios de prueba reconocidos para ello y las que asignan el valor que jurídicamente corresponde a la rendida y, por lo tanto, si, habiéndose empleado un medio de prueba legal en las condiciones previstas por la ley, el hecho debe o no tenerse por acreditado, es facultad soberana de los jueces sentenciadores (Rev. de Der. y Juris. Corte Suprema. Cas. fondo. 19 de noviembre de 1951. Secc. IV, parte II, pág. 276. Rev. año 1951).

En este caso, ambas impugnaciones pretenden una nueva revisión de los medios probatorios incorporados, buscando, de manera velada, una renovada ponderación que pugna con la facultad judicial de valorar las probanzas de manera soberana, en tanto se respeten las normas reguladoras de esta materia, tal como ocurre en la especie. Se requiere de la existencia de un error que haya tenido una influencia en lo dispositivo del fallo, lo cual debe precisarse con claridad. Es más, como ya se ha sostenido, *“para que pueda prosperar el recurso de casación en el fondo por violación de las normas legales reguladoras de la prueba, es preciso que los sentenciadores hayan incurrido en un error o infracción de derecho en la aplicación de una ley relativa a la prueba, como por ejemplo: que hayan admitido pruebas que la ley repudia o que hayan rechazado medios*



justificativos que la ley autoriza o que hayan resuelto que la prueba incumbe al reo, pero la apreciación del mérito intrínseco de los elementos de prueba es mera cuestión de hecho y al Tribunal de Casación le está vedado examinar, ponderar o aquilatar los medios probatorios mismos, ya justipreciados por los jueces de la instancia en ejercicio de facultades propias y soberanas y revisar las conclusiones a que éstos han llegado, porque el hacerlo importaría desnaturalizar la esencia del recurso de casación en el fondo, convirtiéndolo en una tercera instancia...” (Rev. de Der. y Juris. Corte Suprema. Cas. fondo. 16 de mayo de 1963. Secc. IV, parte II, pág. 241. Rev. año 1963).

De tal forma que, al igual que los restantes, los recursos indicados deberán ser descartados;

19°) Que, por parte de los apoderados de los sentenciados Joyce Ahumada Despouy, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme, Carlos López Inostroza, Juvenal Piña Garrido, Jorge Díaz Radulovic, José Meza Serrano, Orlando Altamirano Sanhueza, Berta Jiménez Escobar, Sergio Escalona Acuña, Jorge Manríquez Manterola y Teresa Navarro Navarro recurren de casación en el fondo, ocasión en que invocan la causal señalada en el numeral 1° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal.

En el caso de la primera inculpada, a través de su apoderado, dirige su recurso basado en el hecho que, en su concepto, no fue reconocida la rebaja de responsabilidad criminal del numeral 6° del artículo 11 del Código Penal y, de haber aplicado la misma, ello habría conducido a una pena no superior a tres años de presidio menor en su grado mínimo, pudiendo acceder con ello al beneficio de la libertad condicional de la ley 18.216.



En tanto, los restantes impugnantes cuestionan el rechazo de la media prescripción, lo mismo que las atenuantes asociadas a los artículos 211 y 214, inciso 2° del Código de Justicia Militar, asegurando que son concurrentes los requisitos legales para acoger los referidos institutos, instando porque sean reconocidos y ello se refleje en una penalidad menor a la aplicada;

20°) Que, sobre los tópicos comunes, cabe indicar que la institución contemplada en el artículo 103 del Código Penal resulta incompatible con el carácter de lesa humanidad asociado al delito investigado en estos autos, de tal manera que la consideración de la misma ni siquiera viene identificada como un yerro, lo cual conlleva el inmediato rechazo de una parte de las protestas enarboladas por las defensas pues ella, además, contraría los principios generales del derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Núremberg y las sentencias de dicho Tribunal, confirmadas como tales por resolución unánime de la Asamblea General de las Naciones Unidas 95 (I), de fecha 14 de diciembre de 1946, vigentes al momento de su perpetración y, actualmente, recogidos en el texto del Estatuto de Roma.

En este orden de cosas, no resulta un yerro por parte de los sentenciadores el rechazo de la media prescripción;

21°) Que similar derrotero le corresponde a la alegación planteada respecto a la procedencia de las modificatorias de los artículos 211 y 214, ambas del Código de Justicia Militar. En este caso, la atenuante del artículo 211 del Código de Justicia Militar tiene lugar fuera de los casos previstos en el artículo 214 inciso 2°, cuando el inferior comete un delito militar o un delito común por dar cumplimiento a una orden de un superior jerárquico y siempre que ese



cumplimiento no constituya un caso de obediencia debida del artículo 334 del mismo cuerpo legal.

Para su procedencia, es necesaria la orden del superior, la que debe ser relativa al servicio, que sea dada en uso de atribuciones legítimas y, si la orden tiende notoriamente a la perpetración de un delito, que sea representada por el inferior e insistida por el superior.

En estos antecedentes, ninguno de los presupuestos descritos se cumple pues, en primer lugar, los sentenciados ni siquiera reconocen participación en el delito ni tampoco han precisado de qué manera representó la ilicitud de su accionar, ni menos identifican quien los comisionó para tal cometido, de tal manera que ninguna de las alegaciones encuentra sustento probatorio y por ello también debe ser descartada;

22º) Que, en lo referente a la rebaja solicitada por la defensa de Ahumada Despouy, lo primero que debe anotarse es que ella fue acogida para la sentenciada, de tal manera que no es efectivo el primer sustento de la alegación de su asistencia letrada. Luego, aun cuando la discusión planteada se asocie a la valoración entregada a dicha atenuante dentro del marco punitivo, ello tampoco puede vincularse a un vicio de casación como el que se plantea pues, en este punto, cabe mencionar que la penalidad del ilícito por el cual ha resultado condenada la impugnante – secuestro calificado – recorre el tramo punitivo de presidio mayor en cualquiera de sus grados y, al ser sancionada en calidad de cómplice, por aplicación del artículo 51 del Código Penal, pasa a rebajarse a la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para el crimen o simple delito, es decir, el tramo de castigo se sitúa en el presidio menor en su



grado máximo, tres años y un día a cinco años. Luego, al tratarse de una pena divisible y, por encontrarse acogida una sola morigerante, cobra aplicación el inciso 2° del artículo 67 del Código Punitivo, en donde se señala: *“Si concurre sólo una circunstancia atenuante o sólo una agravante, la aplicará en el primer caso en su mínimo y en el segundo en su máximo.”*; en tal escenario, al aplicarse una pena de cuatro años, se aplica la regla legal precisamente indicada, con lo cual, no existe incorrección en la forma descrita y con ello deben ser descartados los recursos indicados;

23°) Que, enseguida, la defensa de Víctor Álvarez Droguett instaura un recurso de invalidación de fondo, el cual se sustenta en la causal de invalidación séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Criminal, denunciando la infracción del artículo 488 N° 1° y 2° del mismo cuerpo legal, en relación con los artículos 16 y 141 del Código Penal vigente a la época de los hechos. En su desarrollo, apunta que, en la instancia, no existen elementos de cargo de los cuales se puede apreciar, a simple vista, que no son hechos reales ni probados, ni tampoco existen presunciones múltiples y graves que lleven a construir una presunción de responsabilidad.

En consecuencia, solicita que se invalide el fallo cuestionado y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que se resuelva la nulidad de la sentencia recurrida y, en su lugar, se declare la absolución por falta de participación;

24°) Que, tanto el querellante como el apoderado de la Unidad Programa de Derechos Humanos también presentaron un recurso de casación en el fondo basado en una única causal, la contemplada en el numerando séptimo del referido



artículo. En el caso de ambos, se cuestiona la decisión de absolver a Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, en tanto, el apoderado de la entidad gubernamental, además, reclama ante la absolución de los acusados, Celinda Angélica Aspe Rojas e Italia Donata Vacarella Gilio.

En general, los mandatarios razonan sobre las actividades realizadas por cada uno de los inculpados, reconociendo que, en sus acciones, existe una marcada coautoría que se sanciona en el numeral 3° del artículo 15 del Código Penal y se cumple, principalmente, el elemento subjetivo de dicha clase de participación (concierto previo) ya que, por los argumentos que detallan, existen elementos probatorios suficientes para concluir que todos aquellos que operaron en el cuartel Simón Bolívar conocían y aceptaban el plan de eliminación de los miembros del Partido Comunista. Así, repasa todos los testimonios y declaraciones que consideran suficientes para estimar que los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), de manera voluntaria y con pleno conocimiento de su contenido y propósito criminal, ejecutaron algún extremo del delito y ello satisfizo la exigencia del concierto previo o acuerdo de voluntades que caracteriza a la coautoría y que se encuentra presente en la hipótesis normativa prevista en el artículo 15 N° 3 del Código Penal.

Igualmente, detallan la trayectoria de cada uno de los acusados, como, asimismo, los elementos de cargo que existen en su contra, señalando que realizaron un aporte que, en definitiva, fue funcional a la realización del delito de autos, en conjunto con los restantes agentes operativos del cuartel Simón Bolívar y sin su contribución, la realización común del ilícito de autos habría fracasado o visto dificultada su consecución.



En definitiva, en lo pertinente, solicita acoger íntegramente el recurso, declarando que la sentencia recurrida es nula y, acto seguido y sin nueva vista, se dicte sentencia de reemplazo por la cual, junto con confirmar la condena en calidad de coautores del delito de secuestro calificado de Reinalda Pereira Plaza de los otros sentenciados, se proceda a condenar a los mencionados Chaigneau, Aspe y Vacarella, en calidad de autores del mismo delito, a la pena que corresponda, más accesorias legales y costas de la causa;

25°) Que, en el estudio de los arbitrios que se detallaron, es importante advertir que las incorrecciones apuntadas se desarrollan de forma inadecuada, en particular lo que se relaciona a la causal de casación. En efecto, esta Corte, en otros pronunciamientos, ha reafirmado la posición referente al hecho que la causal que se invoca (infracción a la ley reguladora de la prueba), si se esgrime aisladamente y no se le vincula con otra de las causales de invalidación que prevé el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, debe ser desestimada pues, al pretender alterar o modificar el sustrato fáctico del fallo impugnado, es menester que conjuntamente se vincule con algún otro de los motivos de nulidad que dicho precepto consagra, por cuanto la sola mutación de los hechos no permite que este tribunal de casación pueda hacer uso de sus facultades invalidatorias determinando, de oficio, cual de aquellas otras causales –taxativamente señaladas en el estatuto procesal del ramo- que denoten una errada aplicación de la ley corresponde hacer concurrente.

De igual forma, si lo anterior no fuese suficiente, conviene recordar la posición que se viene enfatizando en pasajes anteriores, en torno al hecho que, *“la causal de casación del N° 7 del artículo 546, infracción de las leyes*



reguladoras de la prueba, implica el quebrantamiento de una norma legal relativa a la prueba y, en consecuencia, ella no es admisible en el caso que los jueces de fondo dan por establecidos los hechos invocados en el juicio, apreciando estimativamente el valor de las probanzas legalmente rendidas en la causa, materia en que aquellos tienen facultad privativas que escapan de la censura del Tribunal de Casación” (Rev. de Der. y Juris. Corte Suprema. Cas. fondo. 14 de Agosto de 1963. Secc. IV, parte II, pág. 380. Rev. año 1963), de tal manera que los reproches evidenciados no son tales y corresponde desestimarlos;

26°) Que, por último, el apoderado del Consejo de Defensa del Estado entabla un recurso de casación en el fondo, quien lo hace consistir en las causales contempladas en los numerales 4° y 7° del artículo 546 del Código Adjetivo, cuestionando la decisión de absolver de los cargos criminales a los acusados, lo cual vulneró los artículos 1, 14 N° 1 y N° 2, 15, 16, 25, 28, 50, 51, 67 inciso segundo y 141 vigente a la época de ocurrencia de los hechos, todos del Código Penal.

En este caso, se repasan los elementos de prueba respecto de la participación de los inculpados que fueron absueltos, dando cuenta que, en su análisis, al absolverlos, se afectaron los numerales 1 y 2 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Así, según asegura, un ajustado análisis debía traer aparejado que, todos los acusados absueltos tenían la calidad de agente de los organismos de seguridad y formaron parte del cuartel de Simón Bolívar, lugar al cual llegó la víctima, luego de ser ilegalmente detenida y permaneció secuestrada, fue torturada, desapareciendo, sin encontrar a la fecha sus restos. A lo dicho, agrega que las unidades o brigadas a las que pertenecieron los



inculpados, desarrollaron funciones y tuvieron como misión expresa la detención e ilícita privación de libertad de los miembros del Partido Comunista al cual la víctima se relacionó. En sí, entiende que los acusados absueltos fueron agentes operativos, pertenecientes a una estructura militar y jerárquica en que el propósito y función ilícita encomendada no puede resultarles ajena, pues ellos eran miembros de los organismos de seguridad y represión que estuvieron apostados en el cuartel de Simón Bolívar, lugar donde se verificó el secuestro de la víctima. Asimismo, destaca los grados militares de algunos sujetos, entre ellos el del teniente Chaigneau y del suboficial Juan Hiro Álvarez, quienes a diario, permanecieron en el susodicho cuartel e incluso, uno de ellos, contaba con una oficina dispuesta al interior, como es el caso del aludido teniente Chaigneau.

En ese orden de consideraciones, detalla que, como consecuencia del error en la valoración probatoria denunciada, al infringirse las normas reguladoras de la prueba del modo señalado, se verificó la causal invocada del N° 4 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, que la sentencia calificó como lícito un hecho que la ley pena como delito y absolvió a los acusados.

En consecuencia, pide que se anule la sentencia de segunda instancia, dictando la sentencia de reemplazo, en la cual se revoque en aquel extremo en que se absolvió a los acusados y, en su lugar, se los condene a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales del caso, como coautores del delito de secuestro calificado en la persona de Reinalda Pereira Plaza, perpetrados en la ciudad de Santiago a partir del 15 de diciembre de 1976, confirmando en lo demás el fallo de primera instancia;

27°) Que, conforme a lo señalado, el cuestionamiento del impugnante fiscal



consiste en la decisión de absolver a los acusados Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, Juan Edmundo Suazo Saldaña, Hiro Álvarez Vega, Celinda Angélica Aspe Rojas, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Eduardo Patricio Cabezas Mardones, Italia Donatta Vacarella Gilio, Camilo Torres Negrier, Marilyn Melahani Silva Vergara y José Domingo Seco Alarcón.

En particular, en el examen de los laudos censurados, los sentenciadores asentaron ciertos hechos que inciden en la participación que les endilga el acusador estatal, entre ellos, la circunstancia que, en el *“segundo semestre del año 1976, se trasladaron a dicho recinto, las agrupaciones de la DINa a cargo de los oficiales Germán Barriga y Ricardo Lawrence, conjuntamente con sus agentes operativos, los que se preocuparon fundamentalmente de investigar, ubicar, allanar, perseguir, reprimir y desarticular a los miembros del Partido Comunista, en especial a sus cúpulas directivas, para lo cual se habilitaron dependencias provisorias para su instalación; consistentes en oficinas, un gimnasio y camarines que fueron calabozos de encierro, en donde se realizaban los interrogatorios y torturas, utilizando apremios con diversos métodos”*. Asimismo, también se encuentra acreditado el hecho que la víctima, doña Reinalda del Carmen Pereira Plaza, militante del Partido Comunista, fue aprehendida ilegalmente por agentes operativos y luego fue trasladada a las referidas dependencias, en donde fue *golpeada, torturada, apremiada ilegítimamente y luego hecha desaparecer, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero*.

En tal sentido, la discusión planteada no se vincula a la determinación o calificación delictiva sino que el vicio denunciado estriba en que, en esos mismos hechos, inamovibles e incólumes, existe un error al ponderar el acervo probatorio



asociado a la participación criminal imputada a los acusados de los cargos planteados en su contra y, consecuencialmente, se valida el hecho que, sus actividades, no serían ilícitas como lo propone la recurrente. Ahora bien, los sentenciadores de segundo grado, en los considerandos décimo séptimo y décimo noveno ratifican la decisión del ministro instructor, en orden a absolver a los encartados Suazo Saldaña, Torrejón Gatica, Álvarez Vega, Aspe Rojas, Bermúdez Méndez, Cabezas Mardones, Vacarella Gilio, Torres Negrier, Silva Vergara y Seco Alarcón, ello por estimar que no existen elementos probatorios suficientes para determinar su participación, en lo que no existe yerro pues a esa decisión le precede una ponderación racional de los medios probatorios y la recurrente no logra identificar ninguna norma reguladora de la prueba que se manifieste como vulnerada sino que solo busca enfatizar, en los mismos elementos probatorios sopesados por el tribunal, una interpretación disímil que fue descartada, principalmente, porque sus acciones, según cada caso, resultaron marginales en el entramado delictivo asociado al organismo al cual pertenecieron o, derechamente, las imputaciones no alcanzaron para situarlos en el cuartel a la época de los hechos, de tal manera que, por los inculpadados anotados, no cabe sino descartar el título de invalidación presentado;

28°) Que, a diferencia de lo anterior, la situación del acusado Federico Chaigneau Sepúlveda tiene ciertas particularidades que escapan de lo anterior. En este caso, la sentencia cuestionada, en el motivo décimo octavo discurre sobre los motivos que justifican la absolución del encartado, aceptando que, aun cuando aparece vinculado a las unidades operativas que actuaron en el cuartel Simón Bolívar e, incluso, teniendo oficina en ese lugar, ello no alcanza para situarlo en



algún procedimiento destinado a obtener información relativa a identificar a la víctima y tampoco en relación a la detención, encierro, interrogatorio, tortura, desaparición u ocultamiento de la misma. En este sentido, según razona, aun cuando existen testimonios que lo vinculan en el lugar de los hechos, consideran los recurridos que ello es insuficiente para alcanzar el grado de convicción de condena que se requiere;

29°) Que, al respecto, asentado lo anterior, existen hechos que aparecen inconcusos y que conducen a considerar que, al momento de determinar la participación imputada al encartado, se ha cometido un yerro de casación de consideración que debe analizarse.

Lo primero, conforme a las probanzas rendidas, en particular las mencionadas en razonamiento *veintitrés* del fallo de primer grado, se puede tomar como hechos reales y probados que, [1] *la víctima, el día 15 de diciembre de 1976, fue detenida de manera ilegal y clandestina por agentes del Estado, pertenecientes a las unidades operativas cuya misión era reprimir y, en definitiva, eliminar a los integrantes del Partido Comunista; [2] Posterior a su detención, la afectada fue conducida al cuartel Simón Bolívar, lugar acondicionado como un recinto clandestino de detención y tortura, el cual, en un primer momento, operaba la Brigada Lautaro a cargo del mayor Juan Morales Salgado y a las que, luego, se agregaron las unidades comandadas por los oficiales Germán Barriga y Ricardo Lawrence, quienes buscaban cumplir la misión ya indicada, siendo asistidas por los integrantes de la Brigada Lautaro; [3] En ese lugar de detención, la víctima fue sometida a tratos crueles e inhumanos, realizadas por la única razón de profesar ideas políticas contrarias al régimen imperante, lo cual fue realizado a mediados*



de diciembre de 1976, siendo ultimada, desconociéndose, a la fecha, la ubicación de sus restos mortales; [4] En el caso del inculpado Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, teniente de Ejército, él formó parte de la Brigada Lautaro y, en la época en que estuvo detenida la víctima en el cuartel Simón Bolívar, en su calidad de encargado de seguridad de la Manuel Contreras Sepúlveda y su familia, él concurría a esa dependencia ya que, allí, contaba con una oficina.

Así, razonablemente se puede concluir que el teniente Chaigneau contaba con una posición de relevancia en la empresa delictiva, estando al mando de una unidad de tal importancia que proveía seguridad a Manuel Contreras Sepúlveda, encargado del aparato represor de la época y quien, en su momento, impartió la instrucción al capitán de Ejército, Juan Morales Salgado, en orden a prestar colaboración a las unidades que llegaron al cuartel Simón Bolívar con la misión de atacar al Partido Comunista, lo que fue transmitido a todos los integrantes y que, por cierto, no pudo ser ajeno al inculpado, quien, por su jerarquía y pertenencia a la Brigada que pasaba a ser colaboradora de las otras, toma conocimiento del objetivo y las acciones que desempeñarían las unidades que se posicionan en el cuartel en donde él, incluso, contaba con una oficina, de tal manera que existe un claro conocimiento respecto de la colaboración que debía prestar en el objetivo que pasa a ser común, cuál es la neutralización de los integrantes del referido partido político.

En tal sentido, con lo reflexionado, queda clara la existencia de un conocimiento, en donde el acusado estaba al tanto de su tarea de colaborar en la ejecución del plan delictivo que materializaron las unidades que pasaron a integrarse al cuartel Simón Bolívar, de tal manera que también es posible inferir,



en base a lo asentado previamente, la existencia del concierto previo a que alude el numeral 3° del artículo 15 del Código Penal, en este caso, en la segunda modalidad que prevé esta clase de participación, cual es la presencia del autor, sin tomar parte inmediata en el ilícito. En efecto, conforme a lo establecido, es claro que fluyen presunciones de las características que mandata el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, en torno a la participación criminal del enjuiciado en el secuestro calificado de la víctima, quien fue detenida, torturada y asesinada en la instalación en que estaba presente el teniente Chaigneau, quien, por cierto, comandaba una unidad de la cual, tres de sus subordinadas resultan condenadas por su colaboración criminal, como es el caso de Elisa del Carmen Magna Astudillo, Berta Yolanda del Carmen Jiménez Escobar y Joyce Ana Ahumada Despouy, de tal forma que, incluso, resulta del todo incongruente imputar una autoría o complicidad delictual a quienes ejecutan labores operativas o de custodia asociadas a la víctima y, al mismo tiempo, absolver de toda responsabilidad a quien contaba con un rol de mando en dichas acciones;

30°) Que, en este orden de consideraciones, esta Corte observa un vicio de casación asociado a la determinación de la participación del procesado Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, en donde los sentenciadores de segunda instancia desconocieron las leyes reguladoras de la prueba sobre dicho tópico, desechando la existencia de múltiples presunciones vinculadas a la intervención de aquel en el delito de autos, como asimismo, los testimonios de imputación que pesan en su contra, cuestión que se tradujo en desestimar lo preceptuado en los artículos 459 y 488, N° 1 y 2°, este último numerando referente a la multiplicidad de las presunciones judiciales y que, en definitiva, se tradujo en la absolución del



encartado en el delito de marras, influyendo estas infracciones substancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, puesto que, de haber hecho correcta aplicación de ellas, no se habría confirmado la resolución impugnada y se habría condenado a Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda en calidad de autor en los términos del numeral 3° del artículo 15 del Código Punitivo, razón que permite anular la sentencia de segunda instancia, únicamente, en la parte asociada la participación de Chaigneau Sepúlveda y emitir, a este respecto, la de reemplazo que en derecho corresponda.

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se **RESUELVE**:

I. Que, se **RECHAZAN** el recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuestos en favor de los condenados Jorge Hugo Arriagada Mora y Luis Alberto Lagos Yáñez, como asimismo, los recursos de casación en el fondo, presentados por las defensas de los sentenciados Elisa Magna Astudillo, Gladys Calderón Carreño, José Sarmiento Sotelo, Emilio Troncoso Vivallos, Claudio Pacheco Fernández, Gustavo Guerrero Aguilera, Jorge Pichunman Curiqueo, Sergio Castro Andrade, Carlos Miranda Mesa, Orfa Saavedra Vásquez, María Angélica Guerrero Soto, Joyce Ahumada Despouy, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme, Carlos López Inostroza, Juvenal Piña Garrido, Jorge Díaz Radulovic, José Meza Serrano, Orlando Altamirano Sanhueza, Berta Jiménez Escobar, Sergio Escalona Acuña, Jorge Manríquez Manterola, Teresa Navarro Navarro y Víctor Álvarez Droguett; al igual que los recursos de



casación en el fondo presentados por los apoderados de la parte querellante y de la Unidad Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, todos presentados en contra de la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil veintidós, pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

II. Que, se **ACOGUE** el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Estado de Chile, *únicamente*, en la parte que se refiere a la absolución adoptada respecto del acusado Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, en contra de la sentencia antes individualizada, la cual se invalida en esa parte y se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente. En lo demás, el arbitrio queda rechazado en su totalidad.

La decisión, en cuanto al rechazo del recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado, en lo que se refiere a la absolución de los acusados Juan Edmundo Suazo Saldaña, Juan Hiro Álvarez Vega, Celinda Angélica Aspe Rojas, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Eduardo Patricio Cabezas Mardones, Italia Donatta Vacarella Gilio, Camilo Torres Negrier, Marilyn Melahani Silva Vergara y José Domingo Seco Alarcón, fue adoptada con el voto en contra del Ministro señor Llanos, quien fue del parecer de acoger el recurso en dicho capítulo de invalidación y para lo cual tuvo en consideración los siguientes fundamentos:



1°) Que, conforme a lo asentado en la instancia respectiva, resulta acreditado y cierto el hecho que, para la concreción de los objetivos, el organismo de represión denominado DINA, desarrolló un complejo plan delictivo que, en este caso, consistió en la eliminación de los integrantes del Partido Comunista y para lo cual se instruyó al capitán Juan Morales Salgado, la total asistencia de los miembros de la Brigada Caupolicán en la misión dispuesta, a la que se unirían las brigadas de Ricardo Lawrence y Germán Barriga;

2°) Que, en este caso, según se encuentra también acreditado, todos los integrantes de las referidas unidades, entre ellos los mencionados Suazo Saldaña, Álvarez Vega, Aspe Rojas, Bermúdez Méndez, Cabezas Mardones, Vacarella Gilio, Negrier, Silva Vergara y Seco Alarcón, les fue comunicada la instrucción, de tal manera que, previo a la comisión del ilícito, estaban al tanto del sentido de sus actuaciones, es decir, en entender de este disidente, concurre, a lo menos, un concierto previo en la empresa delictiva que afectó a varios integrantes del aludido partido político y que permite sustentar algún grado de participación en el ilícito que afectó a la víctima;

3°) Que, en tal sentido, analizando el acervo probatorio que se alude para cada uno de los enjuiciados, igualmente, se estima que son concurrentes los vicios de casación que le atribuye la apoderada del Consejo de Defensa del Estado a la sentencia emanada por el tribunal de alzada, la cual confirma la absolución de los cargos de los aludidos encartados, de tal manera que, en concepto de quien disiente, correspondía acoger de igual forma la protesta planteada, procediendo a dictar la respectiva sentencia de reemplazo que, en su



lugar, determinara el grado de responsabilidad correspondiente a cada uno de ellos.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

Regístrese.

Rol N° 11.831-2022

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Cristina Gajardo H., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavorari G., y Sr. Álvaro Vidal O. No firman la Ministra Sra. Gajardo y la Abogada Integrante Sra. Tavorari, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y ausente respectivamente.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 30/10/2024 15:22:26

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 30/10/2024 15:22:27

ALVARO RODRIGO VIDAL OLIVARES
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 30/10/2024 15:26:31



En Santiago, a treinta de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

De la sentencia recurrida, además de su parte expositiva, se reproduce su parte considerativa, con excepción de la frase “veintitrés respecto de Federico Chaigneau Sepúlveda,”, la cual se elimina, al igual que el razonamiento décimo octavo.

Conforme a lo anterior, la reflexión “décimo noveno”, pasa ser el motivo “décimo octavo” y así sucesivamente.

En el pronunciamiento reproducido, en la prevención evacuada por parte de la Ministra suplente, donde dice “Guerrero Rosen”, se reemplaza por “Guerrero Soto”.

Se reproduce el raciocinio vigésimo octavo y vigésimo noveno, del fallo de casación que antecede.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:

1°) Que, en materia de participación, en particular con la autoría, el artículo 15 del Código Penal establece a quienes se les considera como autores y, en el numeral 3° se sindicada a: *“Los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él”;*

2°) Que, conforme a lo reflexionado, existe un sustento probatorio suficiente para concluir que, en forma previa a la perpetración del ilícito que afectó a doña



Reinalda Pereira Plaza, el acusado Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda tomó pleno conocimiento del plan delictivo que se dirigiría en contra de los integrantes del Partido Comunista, entre ellos la víctima indicada;

3°) Que, así las cosas, los elementos de cargo apuntados en el razonamiento *veintitrés* del fallo de primer grado, también se revelan como bastantes para vincular al acusado con el cuartel de detención en donde se ejecutaron las acciones propias del delito investigado, lugar en que el referido encausado detentaba un poder de mando sobre los integrantes de las unidades operativas que colaboró en el secuestro calificado investigado, contando, incluso, con una oficina en el aludido recinto clandestino de represión, todo lo cual alcanza para concluir que aquel estuvo concertado en la ejecución del injusto, estando presente en la unidad mientras se ejecutaba el delito de marras, con lo cual existe un yerro por parte del sentenciador de instancia al absolver de los cargos imputados a Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, por cuanto existen circunstancias suficientes para estimar que él ha tenido una participación en calidad de autor, en los términos que prevé el numeral 3° del artículo 15 del Código Punitivo, en el delito de secuestro calificado que afectó a doña Reinalda del Carmen Pereira Plaza;

4°) Que, en este orden de cosas, al encausado Chaigneau sólo le beneficia la minorante de responsabilidad criminal prevista en el numeral 6° del artículo 11 del Código Penal.

Así, en cuanto a la sanción asignada al delito, el secuestro calificado se encuentra castigado con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, de tal forma que, al estimarse concurrente una sola morigerante, conforme con lo



dispuesto en el inciso 2° del artículo 68 del Código Penal, la pena aplicable al delito no puede imponerse en su grado máximo, con lo cual se impondrá la pena en relación con la extensión del daño causado por el delito, así como la edad, grado y rango que tenía al momento de cometer el delito, por lo que se optará por imponerla en su grado mínimo en su tramo inferior.

Por estas consideraciones, y teniendo, además presente, lo que disponen los artículos 15N° 3, 28 del Código Penal, 456 bis, 503, 504, 535, 547 del Código de Procedimiento Penal y 785 del Código de Procedimiento Civil, se declara que:

I.- Se **REVOCA** la sentencia apelada de doce de septiembre de dos mil diecisiete, escrita a fojas 3628 y siguientes, únicamente, en cuanto absuelve a Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, ya individualizado en la causa, y se decide, en cambio, que se lo **CONDENA** a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y, al pago de las costas de la causa, como coautor del delito de secuestro calificado en la persona de Reinalda del Carmen Pereira Plaza, perpetrado en la ciudad de Santiago, a partir del 15 de diciembre de 1976.

II.- Que, en atención a la extensión de la pena impuesta y no concurriendo en la especie los requisitos legales, se deniega al sentenciado alguno de los beneficios alternativos de la Ley N° 18.216, por tanto, deberá cumplir efectivamente la pena corporal impuesta, debiendo considerarse los abonos que determine el juez de la instancia.



III.- Que, en lo demás, se **CONFIRMAN** las decisiones adoptadas por el tribunal de alzada.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 11.831-2022

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Cristina Gajardo H., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavorari G., y Sr. Álvaro Vidal O. No firman la Ministra Sra. Gajardo y la Abogada Integrante Sra. Tavorari, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y ausente respectivamente.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 30/10/2024 15:22:28

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 30/10/2024 15:22:29

ALVARO RODRIGO VIDAL OLIVARES
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 30/10/2024 15:26:32



En Santiago, a treinta de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

